



RESOLUCIÓN 364/2023, de 29 de mayo

Artículos: 7 c) LTPA; 12 y 19.3 LTAIBG

Asunto: Reclamación interpuesta por XXX (en adelante, la persona reclamante), contra el Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules (en adelante, la entidad reclamada) por denegación de información pública.

Reclamación: 109/2023

Normativa y abreviaturas: Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA); Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG); Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)

ANTECEDENTES

Primero. Presentación de la reclamación.

Mediante escrito presentado el 13 de febrero de 2023 la persona reclamante, interpone ante este CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA (en adelante Consejo) Reclamación en materia de acceso a la información pública contra la entidad reclamada, al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG) y del artículo 33 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante LTPA).

Segundo. Antecedentes a la reclamación.

1. La persona reclamante presentó el 7 de diciembre de 2022, ante la entidad reclamada, solicitud de acceso a información en los siguientes términos:

"Me pongo en contacto con Uds. en ejercicio del derecho de Acceso a Información Pública obrante en este Ayuntamiento que me asiste con relación a las fincas de mi propiedad, a los contratos y a los documentos del Ayuntamiento que se refieren a ellas, y a todos aquellos contratos y documentos referidos a las concesiones administrativas aprobadas y adjudicadas para el acondicionamiento, equipamiento, así como gestión y explotación residencial del inmueble para personas mayores sito en Alcalá de los Gazules, en Alameda de la Cruz 10 e inscrito en el Inventario de Bienes de la Corporación en el epígrafe 1, grupo A, construcciones, bajo la signatura 1.A.64.

"Ello con base a los siguientes antecedentes, y con la legitimación que se indica:

[se citan antecedentes]



"7) En concreto, solicito formalmente acceder a los siguientes documentos y expedientes:

"1. Expediente [nnnnn] sobre Resolución de Contrato de la Concesión administrativa referida.

"2. Expediente [nnnnn] sec- resolución del contrato de la residencia – continuación del expediente [nnnnn].

"3. Expediente Municipal de Licencia de Obras del proyecto de construcción del complejo residencial, para comprobar el proyecto autorizado, así como la superficie que ocupa, ya que la concesión municipal sólo se refiere y limita a las fincas del Ayuntamiento, pero no incluye las fincas de la familia [apellido de la persona reclamante].

"4. Relación exacta de las fincas afectas a la concesión administrativa, fincas propiedad del Ayuntamiento referidas a la concesión/afectas y fincas alquiladas a cada una de las concesionarias a las que se les ha adjudicado este contrato.

"5. Cambio de titularidad que solicitó el Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules solicitó en procedimiento administrativo de resolución de contrato de concesión administrativa a [se cita empresa], iniciado el [nnnnn]. Dicho cambio de titularidad, solicitado a raíz de la reversión a favor del Ayuntamiento por la resolución de la concesión arriba referida, se solicitó el 07.12.2016 y fue estimado a favor del Ayuntamiento, el 03.01.2017, estimación que también solicitamos. El objeto es comprobar que el Ayuntamiento no se haya adjudicado por error ningún derecho relativo a las fincas nº [nnnnn] y [nnnnn] del RP de Medina Sidonia.

"6. Escritura de Hipoteca suscrita entre [se cita entidad financiera] y la concesionaria, para comprobar la extensión de la hipoteca y las fincas sobre la que esta ha recaído. Asimismo, solicito posteriores cesiones de dicha hipoteca (por ejemplo, a [se cita empresa]), así como resultado de la ejecución hipotecaria, si hubiera tenido lugar.

"7. Si los hubiere, documentos que indiquen que las fincas nº [nnnnn] y [nnnnn] del RP de Medina Sidonia son propiedad del Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules o de otra entidad.

"8. Documentos que aclaren si el contrato de arrendamiento que origina las rentas adeudadas, sigue o no, a día de hoy, vigente, dado que se ha producido, aparentemente, una resolución del contrato de Concesión Administrativa sobre residencia por parte del Ayuntamiento y una posterior anulación judicial de esta resolución contractual por el TSJ de Andalucía.



“9. En caso de que dicho contrato de arrendamiento siga vigente (es decir, que los hechos referenciados en el apartado anterior no hayan afectado al contrato de arrendamiento), y dado que dicho contrato parece haber sido subrogado a [se cita], documentos que acrediten las obligaciones asumidas por la subrogataria (Ej: cesión contractual, obligaciones asumidas por [se cita institución], etc).

“10. Sentencia recaída en Juicio Ordinario 153/17 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Cádiz y la sentencia de apelación nº385/2018, emitida en mayo de 2020 por el TSJ de Andalucía. Asimismo demanda y sentencia recaída en procedimiento de ejecución de título judicial 153.0/2017 instada en el Juzgado de lo contencioso-administrativo nº2 de Cádiz, y demanda de ejecución forzosa de la sentencia 267/2018 instada el 2 de enero de 2022 ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo nº2. Todos los documentos judiciales afectan directamente a la resolución del contrato de concesión administrativa y al contrato de arrendamiento firmado con la concesionaria.

“11. En caso de que se haya producido una nueva adjudicación / concesión administrativa que afecte a las fincas referidas, o una subrogación de éstas, no señalada anteriormente, todos los expedientes y documentación relativa a la misma/s.

“12. Cualquier otro expediente, contratos, o documentación que afecte a las fincas identificadas por razón de la concesión administrativa y sus eventuales resoluciones y/o subrogaciones.

8) El acceso a la documentación solicitada se ampara en el art. 105.b de la Constitución española y los arts. 12, 13, 17 y 19 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”.

2. En la reclamación, la persona reclamante manifiesta que no ha obtenido respuesta de la entidad reclamada.

Tercero. Tramitación de la reclamación.

1. El 16 de febrero de 2023 el Consejo dirige a la persona reclamante comunicación de inicio del procedimiento para la resolución de la reclamación. El mismo día se solicitó a la entidad reclamada copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada asimismo por correo electrónico de fecha 16 de febrero de 2023 a la Unidad de Transparencia respectiva.

2. A la fecha de firma de este Resolución, no consta que la entidad reclamada haya contestado a la solicitud de expediente y alegaciones.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero. Sobre la competencia para la resolución de la reclamación.



1. De conformidad con lo previsto en los artículos 24 LTAIBG y 33 LTPA, en relación con lo dispuesto en el artículo 3.1.d) LTPA, al ser la entidad reclamada una entidad local de Andalucía, el conocimiento de la presente reclamación está atribuido a la competencia de este Consejo.
2. La competencia para la resolución reside en el Director de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1. b) LTPA.
3. Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras.

Segundo. Sobre el cumplimiento del plazo en la presentación de la reclamación.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo en el artículo 24.2 LTAIBG la reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC).

Sobre el plazo máximo de resolución, el artículo 32 LTPA establece que las solicitudes deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible. En el ámbito de la entidad reclamada, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, salvo que la entidad hubiera establecido uno menor.

Sobre el silencio administrativo, establece el artículo 20.4 LTAIBG que transcurrido del plazo máximo de resolución sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. A su vez, los artículos 20.1 LTAIBG y artículo 32 LTPA establecen que el plazo máximo de resolución podrá ampliarse por el mismo plazo, respectivamente, en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante.

2. En el presente supuesto la solicitud fue presentada el 7 de diciembre de 2022, y la reclamación fue presentada el 13 de febrero de 2023. Así, considerando producido el silencio administrativo transcurrido el plazo máximo para resolver desde la solicitud, la reclamación ha sido presentada en plazo, conforme a lo previsto en el artículo 24.2 LTAIBG y el artículo 124 LPAC.

Tercero. Sobre la falta de respuesta de la entidad reclamada a la solicitud de información.

Antes de abordar el examen de la reclamación, hemos de señalar que la ausencia de respuesta a una solicitud de información pública puede constituir un incumplimiento de la exigencia prevista en el artículo 32 LTPA, que



dispone que las solicitudes *“deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible”*, que en lo que hace al órgano concernido sería de un mes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20.1 LTAIBG.

A este respecto, debemos recordar que todos los órganos y entidades incluidos en el ámbito de aplicación de la LTPA están obligados a resolver expresamente en plazo las solicitudes de acceso a información pública que les sean planteadas, y que el incumplimiento de la obligación de resolver en plazo puede ser constitutiva de infracción, según dispone el régimen sancionador de la LTPA.

Otra consecuencia directa de la ausencia de respuesta en plazo es la producción de un acto presunto de denegación de la solicitud planteada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 20.4 LTAIBG, y contra dicho acto se interpone la reclamación que ahora hemos de analizar.

Cuarto. Sobre la falta de respuesta de la entidad reclamada al requerimiento del Consejo.

La entidad reclamada no ha contestado al requerimiento de informe y expediente desde que le fue solicitado por este Consejo. A este respecto, resulta oportuno recordar que la falta de colaboración en la tramitación de la reclamación puede igualmente resultar constitutiva de infracción, según prevé el citado régimen sancionador.

De conformidad con lo establecido en el artículo 28 LTPA, *“el procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso se regirá por lo establecido en la legislación básica en materia de transparencia y por lo previsto en esta Ley”*. Por otra parte, conforme al artículo 24.3 LTAIBG la tramitación de la reclamación se ajustará a lo dispuesto en materia de recursos a la norma reguladora del procedimiento administrativo común. Con base en ese marco normativo, este Consejo, una vez que tiene entrada la reclamación, procede a solicitar al órgano reclamado de la información el expediente derivado de la solicitud de información, que esencialmente se refiere a la propia solicitud de información y cuantas actuaciones se deriven de la misma; es decir, fecha en la que tuvo entrada su solicitud en el órgano, trámites de alegaciones concedidos ex 19.3 LTAIBG a personas que puedan resultar afectadas, contestación de los interesados, emisión de informes al respecto, acuerdos de ampliación de plazo, resolución acordada y fecha de notificación y cuantos otros trámites sean acordados durante el procedimiento de resolución. Igualmente se solicita al órgano un informe y cuantos antecedentes, información o alegaciones consideren oportuno para la resolución de la reclamación.

Esta solicitud se realiza no sólo por estar regulado expresamente para la resolución de las reclamaciones, sino porque se considera preciso para que este Consejo disponga de los elementos de juicio necesarios y conozca la posición del órgano ante las alegaciones vertidas en la reclamación. Por tal razón, no resulta casual que el artículo 52.2.c) LTPA disponga como infracción grave en la que pueden incurrir las autoridades, directivos y personal de los órganos reclamados *“[l]a falta de colaboración en la tramitación de las reclamaciones que se presenten ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía”*.

En el caso que nos ocupa, y como se refleja en los antecedentes, fue solicitada a la entidad reclamante la citada documentación e informe y, hasta la fecha, no consta que haya tenido entrada en este Consejo.



Comoquiera que sea, conforme a lo previsto en el artículo 80.3, puesto en relación con el artículo 22.1.d), ambos de la LPAC, se prosiguen las actuaciones en orden a resolver la reclamación interpuesta.

Quinto. Consideraciones generales sobre el derecho de acceso a la información pública.

1. Constituye “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia, “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA].

Según establece el artículo 24 LTPA, “[t]odas las personas tienen derecho de acceder a la información pública veraz [...] sin más limitaciones que las contempladas en la Ley”. Y el artículo 6 a) LTPA obliga a que su interpretación y aplicación se efectúe tomando en consideración el “principio de transparencia, en cuya virtud toda la información pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley”.

La legislación reguladora de la transparencia, pues, se fundamenta y estructura en torno a una regla general de acceso a la información pública, que únicamente puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten su restricción o denegación.

2. Las causas de inadmisión se encuentran enumeradas en el artículo 18 («Causas de inadmisión») LTAIBG, y su aplicación debe ser objeto de una interpretación restrictiva y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado (Resolución CTPDA 451/2018, FJ 5º).

Sobre ello nos dice el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera):

“La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto).

3. Los límites al derecho de acceso están contenidos en el artículo 14 LTAIBG, y al igual que las causas de inadmisión, deben ser interpretados restrictivamente y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado en cada caso concreto.



Sexto. Consideraciones de este Consejo sobre el objeto de la reclamación.

1. La persona reclamante solicitó acceso a extensa documentación relacionada, en su mayoría, con dos fincas, un contrato de concesión administrativa y un contrato de arrendamiento.

En materia de contratación pública, las exigencias de transparencia de la información cobran una particular relevancia, pues, además de suponer un evidente gasto de fondos públicos, se trata de un sector de la gestión pública que ha de ajustarse a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos. No es de extrañar, por tanto, que en el catálogo de obligaciones de publicidad activa el artículo 15 a) LTPA incluya la siguiente información:

“Todos los contratos, con indicación del objeto, duración, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones y prórrogas del contrato y la indicación de los procedimientos que han quedado desiertos, los supuestos de resolución de contrato o declaración de nulidad, así como los casos de posibles revisiones de precios y cesión de contratos. Igualmente, serán objeto de publicación las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos y las subcontrataciones que se realicen con mención de las personas adjudicatarias”.

Lo solicitado es “información pública”, al tratarse de documentos, o contenido, que obran en poder de la entidad reclamada, y han sido elaborados o adquiridos por ella en el ejercicio de sus funciones, todo ello de conformidad con el artículo 2.a) LTPA.

Pues bien, considerando que la información solicitada se incardina claramente en el concepto de información pública, que no consta que la persona reclamante haya recibido la información solicitada y que no ha sido alegada por la entidad reclamada ninguna causa de inadmisión ni ningún límite que permita restringir el acceso a la misma, este Consejo debe estimar la presente reclamación en virtud de la regla general de acceso a la información que referíamos en el fundamento jurídico anterior.

2. Sin embargo, a la vista de los antecedentes de la reclamación, no consta que la entidad reclamada haya dado trámite de alegaciones a las terceras personas cuyos derechos o intereses puedan verse afectados por el acceso a la información solicitada, tal y como establece el artículo 19.3 LTAIBG. Por ello, debe cumplirse lo previsto en el citado artículo, y conceder a las terceras personas afectadas, “un plazo de quince días para que pueda(n) realizar las alegaciones que estime(n) oportunas.” Además, la persona reclamante “deberá ser informado de esta circunstancia, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación”.

Por tanto, constatada la inobservancia de lo previsto en el citado art. 19.3 LTAIBG en el procedimiento de resolución de la solicitud por parte de la entidad reclamada, procede retrotraer el procedimiento, con base en



el artículo 119.2 LPAC, al momento en que se conceda el citado trámite de alegaciones a quien pueda resultar afectado por la información solicitada, y seguir la tramitación correspondiente hasta dictar resolución expresa.

La resolución que ponga fin a dicho procedimiento, o la ausencia de respuesta transcurrido el plazo máximo de resolución, podrá ser reclamada potestativamente ante este Consejo, circunstancia que deberá ponerse de manifiesto en su notificación en aplicación de lo previsto en el 40.2 LPAC.

Este Consejo debe aclarar que la retroacción se realizará para aquella parte de la información cuyo acceso pudiera afectar a los derechos o intereses legítimos de terceras personas. Esta afección no ocurrirá para aquella parte de la información que está ya publicada o bien debió estar ya publicada en cumplimiento de la obligación de publicidad activa prevista en el artículo 15 a) LTPA antes citada, o bien de la normativa de contratación pública. Dado que el Ayuntamiento no ha remitido el expediente, este Consejo no puede evaluar el tipo de contratación que se realizó, y por tanto, determinar qué información debió estar publicada.

Así, se considera que la siguiente información no afecta a los derechos o intereses de terceras personas, y por lo tanto debe facilitarse a la persona reclamante en el plazo que posteriormente se indica:

a) *“4. Relación exacta de las fincas afectas a la concesión administrativa, fincas propiedad del Ayuntamiento referidas a la concesión/afectas y fincas alquiladas a cada una de las concesionarias a las que se les ha adjudicado este contrato”.* La entidad deberá facilitar la relación de fincas referidas a la concesión, informando de cada una si son de su propiedad; si siéndolo, están alquiladas; o por el contrario no son de su propiedad.

b) *“7. Si los hubiere, documentos que indiquen que las fincas nº [nnnnn] y [nnnnn] del RP de Medina Sidonia son propiedad del Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules o de otra entidad”.* La entidad deberá informar si las fincas son o no de la propiedad del Ayuntamiento.

c) *“8. Documentos que aclaren si el contrato de arrendamiento que origina las rentas adeudadas, sigue o no, a día de hoy, vigente, dado que se ha producido, aparentemente, una resolución del contrato de Concesión Administrativa sobre residencia por parte del Ayuntamiento y una posterior anulación judicial de esta resolución contractual por el TSJ de Andalucía.* Y en el caso de que no existan, informar expresamente de esta circunstancias.

d) Del resto de documentación solicitada, aquella información que esté o debió estar publicada en cumplimiento de la obligación de publicidad activa prevista en el artículo 15 a) LTPA antes citada, o bien de la normativa de contratación pública.

3. En resumen, la entidad deberá:

a) Facilitar la siguiente información:

- *“4. Relación exacta de las fincas afectas a la concesión administrativa, fincas propiedad del Ayuntamiento referidas a la concesión/afectas y fincas alquiladas a cada una de las concesionarias a*



las que se les ha adjudicado este contrato". La entidad deberá facilitar la relación de fincas referidas a la concesión, informando de cada una si son de su propiedad; si siéndolo, están alquiladas; o por el contrario no son de su propiedad.

- *"7. Si los hubiere, documentos que indiquen que las fincas nº [nnnnn] y [nnnnn] del RP de Medina Sidonia son propiedad del Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules o de otra entidad*". La entidad deberá informar si las fincas son o no de la propiedad del Ayuntamiento.
- *"8. Documentos que aclaren si el contrato de arrendamiento que origina las rentas adeudadas, sigue o no, a día de hoy, vigente, dado que se ha producido, aparentemente, una resolución del contrato de Concesión Administrativa sobre residencia por parte del Ayuntamiento y una posterior anulación judicial de esta resolución contractual por el TSJ de Andalucía. Y en el caso de que no existan, informar expresamente de esta circunstancias.*
- Del resto de documentación solicitada, aquella información que esté o debió estar publicada en cumplimiento de la obligación de publicidad activa prevista en el artículo 15 a) LTPA antes citada, o bien de la normativa de contratación pública.

b) Retrotraer el procedimiento al trámite de alegaciones a terceras personas previsto en el artículo 19.3 LTBG para aquella información cuyo acceso pueda afectar a los derechos o intereses legítimos de terceras personas, en los términos del apartado segundo de este Fundamento Jurídico.

Séptimo. Cuestiones generales sobre la formalización del acceso.

La entidad reclamada ha de ofrecer a la persona reclamante la información objeto de su solicitud, previa disociación de los datos personales que pudiera contener (art. 15.4 LTAIBG). La entidad reclamada deberá tener en cuenta que la disociación de datos personales implica no solo la supresión de la identificación concreta de las personas físicas o aquellos otros datos que pudieran permitir la misma (DNI, dirección, número de teléfono...), sino también de otra información que permitiera igualmente la identificación de alguna persona física. En este sentido, el artículo 4.1 del Reglamento General de Protección de Datos define dato personal como:

"toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona".

Igualmente, el Considerando 26 afirma:

"(...). Para determinar si una persona física es identificable, deben tenerse en cuenta todos los medios, como la singularización, que razonablemente pueda utilizar el responsable del tratamiento o cualquier



otra persona para identificar directa o indirectamente a la persona física. Para determinar si existe una probabilidad razonable de que se utilicen medios para identificar a una persona física, deben tenerse en cuenta todos los factores objetivos, como los costes y el tiempo necesarios para la identificación, teniendo en cuenta tanto la tecnología disponible en el momento del tratamiento como los avances tecnológicos. (...)"

En el caso de que en algunos de los documentos solicitados ni siquiera la supresión u ocultación de información llegara a impedir la identificación de la persona, la entidad reclamada no pondrá a disposición de la persona reclamante aquellos documentos afectados por dicha circunstancia.

A los efectos de la adecuada disociación u ocultación de los datos que puedan aparecer en los documentos, es preciso reseñar que la firma manual también se considera un dato personal y está sujeta a lo expresado anteriormente. Por otra parte, el código seguro de verificación (CSV) de los documentos firmados electrónicamente deberá ser ocultado en caso de que se haya suprimido algún dato del documento en cuestión cuya copia se facilite como respuesta a la solicitud de acceso a la información, o bien cuando el acceso a la correspondiente verificación pueda permitir la consulta de algún dato personal, no revelado en el documento, de la persona firmante, como puede ser, por ejemplo, el DNI.

Y en la hipótesis de que no exista alguna de la información solicitada, la entidad reclamada deberá transmitir expresamente esta circunstancia a la persona reclamante.

La información obtenida podrá usarse sin necesidad de autorización previa, con las únicas limitaciones de las que se deriven de la LTPA y otras leyes, según lo previsto en el artículo 7 d) LTPA.

Asimismo, según el artículo 8 a) LTPA, las personas que accedan a información pública en aplicación de la normativa de transparencia deberán ejercer su derecho con respeto a los principios de buena fe e interdicción del abuso del derecho.

En el caso de que la información a la que se concede el acceso contuviera datos personales, el artículo 15.5 LTAIBG establece que la normativa de protección de datos será de aplicación al tratamiento posterior de los obtenidos a través del ejercicio del derecho de acceso.

En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente

RESOLUCIÓN

Primero. Estimar la Reclamación en cuanto a la solicitud de:

"1. Expediente [nnnnn] sobre Resolución de Contrato de la Concesión administrativa referida.

"2. Expediente [nnnnn] sec- resolución del contrato de la residencia – continuación del expediente [nnnnn].



"3. Expediente Municipal de Licencia de Obras del proyecto de construcción del complejo residencial, para comprobar el proyecto autorizado, así como la superficie que ocupa, ya que la concesión municipal sólo se refiere y limita a las fincas del Ayuntamiento, pero no incluye las fincas de la familia [apellido de la persona reclamante].

"4. Relación exacta de las fincas afectas a la concesión administrativa, fincas propiedad del Ayuntamiento referidas a la concesión/afectas y fincas alquiladas a cada una de las concesionarias a las que se les ha adjudicado este contrato.

"5. Cambio de titularidad que solicitó el Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules solicitó en procedimiento administrativo de resolución de contrato de concesión administrativa a [se nombra empresa] iniciado el 26.04.2016. Dicho cambio de titularidad, solicitado a raíz de la reversión a favor del Ayuntamiento por la resolución de la concesión arriba referida, se solicitó el 07.12.2016 y fue estimado a favor del Ayuntamiento, el 03.01.2017, estimación que también solicitamos. El objeto es comprobar que el Ayuntamiento no se haya adjudicado por error ningún derecho relativo a las fincas nº [nnnnn] y [nnnnn] del RP de Medina Sidonia.

"6. Escritura de Hipoteca suscrita entre [se cita entidad] y la concesionaria, para comprobar la extensión de la hipoteca y las fincas sobre la que esta ha recaído. Asimismo, solicito posteriores cesiones de dicha hipoteca (por ejemplo, a [se cita empresa]), así como resultado de la ejecución hipotecaria, si hubiera tenido lugar.

"7. Si los hubiere, documentos que indiquen que las fincas nº [nnnnn] y [nnnnn] del RP de Medina Sidonia son propiedad del Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules o de otra entidad.

"8. Documentos que aclaren si el contrato de arrendamiento que origina las rentas adeudadas, sigue o no, a día de hoy, vigente, dado que se ha producido, aparentemente, una resolución del contrato de Concesión Administrativa sobre residencia por parte del Ayuntamiento y una posterior anulación judicial de esta resolución contractual por el TSJ de Andalucía.

"9. En caso de que dicho contrato de arrendamiento siga vigente (es decir, que los hechos referenciados en el apartado anterior no hayan afectado al contrato de arrendamiento), y dado que dicho contrato parece haber sido subrogado a [se cita institución], documentos que acrediten las obligaciones asumidas por la subrogataria (Ej: cesión contractual, obligaciones asumidas por [se cita institución], etc).

"10. Sentencia recaída en Juicio Ordinario 153/17 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Cádiz y la sentencia de apelación nº385/2018, emitida en mayo de 2020 por el TSJ de Andalucía. Asimismo demanda y sentencia recaída en procedimiento de ejecución de título judicial 153.0/2017 instada en el Juzgado de lo contencioso-administrativo nº2 de Cádiz, y demanda de ejecución forzosa de la sentencia 267/2018 instada el 2 de enero de 2022 ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo nº2. Todos los documentos judiciales afectan directamente a la resolución del contrato de concesión administrativa y al contrato de arrendamiento firmado con la concesionaria.



“11. En caso de que se haya producido una nueva adjudicación / concesión administrativa que afecte a las fincas referidas, o una subrogación de éstas, no señalada anteriormente, todos los expedientes y documentación relativa a la misma/s.

“12. Cualquier otro expediente, contratos, o documentación que afecte a las fincas identificadas por razón de la concesión administrativa y sus eventuales resoluciones y/o subrogaciones.

La entidad deberá:

- a) Facilitar la información correspondiente a las peticiones 4, 7 y 8.
- b) Del resto de documentación solicitada, facilitar aquella información que esté o debió estar publicada en cumplimiento de la obligación de publicidad activa prevista en el artículo 15 a) LTPA antes citada, o bien de la normativa de contratación pública.
- c) Retrotraer el procedimiento al trámite de alegaciones a terceras personas previsto en el artículo 19.3 LTBG para aquella información cuyo acceso pueda afectar a los derechos o intereses legítimos de terceras personas.

Todo ello en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución en los términos del Fundamento Jurídico Sexto y Séptimo.

Segundo. Instar a la entidad reclamada a que remita a este Consejo en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución, las actuaciones realizadas, incluyendo la acreditación del resultado de las notificaciones practicadas.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla que por turno corresponda en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8.3 y 46.1, respectivamente, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

EL DIRECTOR DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA
Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA

Jesús Jiménez López

Esta resolución consta firmada electrónicamente.